CUADERNOS DE HISTORIA 37

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS

UNIVERSIDAD DE CHILE DICIEMBRE 2012: 33 - 49

EL DEBATE Y LOS MÁRGENES DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA INDEPENDENCIA MEXICANA

*Rodrigo Christian Nuñez Arancibia**

RESUMEN: Este artículo explica cómo el México independiente en su primera década vivió una polarización social y política, debido a que se redefinieron los márgenes de la esfera pública. El nuevo Estado debió enfrentarse, entonces, al dilema de crear las bases institucionales y legales de la libertad de expresión, necesarias para la constitución de una ciudadanía republicana. Los debates entre los insurgentes y contrainsurgentes a través de la prensa son muestra de dicho cambio.

PALABRAS CLAVE: libertad de prensa, independencia de México, opinión pública.

DEBATE AND PUBLIC SPHERE MARGINS IN THE MEXICAN INDEPENDENCE.

ABSTRACT: *This article explains how the independent Mexico in its first decade lived a social and political polarization, because the margins were defined the public sphere. The new state was confronted, then the dilemma of creating the institutional and legal foundations of freedom of expression, necessary for the establishment of republican citizenship. Discussions the insurgents and contra insurgency trough the press is a sign of the change.*

* Doctor en Ciencia Social. Profesor-investigador tiempo completo del Cuerpo Académico de Historia de México y de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: rnuneza@yahoo.com

KEY WORDS: *Freedom of the press, independence of Mexico, public opinion.*

Recibido: marzo 2012

Aceptado: octubre 2012

Introducción

En su obra *Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España* (1787), Hipólito Villarreal dejaba constancia de una de las primeras formulaciones de la necesidad de opinión pública en una sociedad ilustrada. Villarreal iniciaba aquel diagnóstico de los problemas del virreinato, durante las últimas décadas borbónicas, confesando que muchos de los temas abordados en su tratado los había discutido en privado con funcionarios virreinales. Se preguntaba entonces “qué fruto sacaría de estampar metódicamente en el papel” sus ideas sobre la administración eclesiástica, fiscal, militar y civil del reino¹. A pesar de que Villarreal era consciente de que “escribir la verdad” podía ser un “delito enorme” en aquellos tiempos, concluía que era necesario el debate público de los problemas novohispanos si no quería que “esta capital sólo sea ciudad por el nombre” y fuera más bien “una perfecta aldea o un populacho compuesto de infinitas castas de gentes entre las que reinan la confusión y el desorden”².

El avance de aquella idea ilustrada sobre la necesidad de una opinión pública que contribuyera a limitar los elementos corporativos y estamentales del virreinato, puede observarse en las últimas décadas del siglo XVIII. Antes de 1787, año de la aparición del tratado de Villarreal y del inicio de la publicación de las *Gazetas de literatura* de Juan Antonio de Alzate y Ramírez, varios teólogos, sacerdotes y médicos, como Juan Ignacio Castorena y Ursúa, Juan Francisco Sahagún de Arévalo y Juan Ignacio Bartolache y Díaz de Posada habían intentado la edición de *Gazetas* y *Mercurios*, similares a los que la Ilustración hispánica promovió en los cuatro reinos americanos³. Pero es con observaciones sobre física, historia natural y artes útiles (1787) de Alzate y, sobre todo, con las *Gazetas*, que aparece, realmente, una noción de opinión pública ligada al concepto ilustrado de lo útil.

¹ Villarreal, Hipólito, *Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España*, México, D. F., Porrúa, Gobierno de la Ciudad de México, 1999, pp. 61-62.

² *Ibid.*, pp. 62-63.

³ Argudín, Yolanda, *Historia del periodismo en México*, México, D.F., Panorama Editorial, 1987, pp. 11-29.

En los proyectos editoriales de Alzate, que terminaron siendo asimilados por la administración virreinal, es perceptible una evolución en el concepto de lo útil, asociado a la constitución una esfera pública moderna⁴. La utilidad pública en aquellas publicaciones comienza a referirse no solo a los beneficios que las ciencias naturales aportan a la vida económica sino a una concepción de la moral y la política en la que los valores como los de “libertad”, “soberanía” y “justicia” son entendidos como “útiles” para el progreso de la sociedad. Esa transformación típicamente ilustrada ya se constata en el surgimiento del primer periódico de tipo político, el *Diario de México*, que a partir de 1805 impulsaron el publicista Carlos María de Bustamante y el oidor criollo de la Real Audiencia de México, Jacobo de Villaurrutia.

Los testimonios de Alzate son además especialmente ilustrativos de la rápida transformación de ese sentimiento progresista de “patria chica” dentro del imperio español, en una pedagogía cívica de antiguo régimen o protorrepública⁵. Entre 1784 y 1795, Alzate publicó decenas de artículos sobre la urgencia de introducir el cultivo intensivo de la caña de azúcar, en vistas al auge de la economía de plantación esclavista en el Caribe; sobre el valor de la crianza de grana cochinilla para abastecer de colorantes a la industria textil, sobre el interés del salitre en el comercio atlántico y sobre la necesaria renovación tecnológica de la minería⁶. Muy pronto, sin embargo, este progresismo descubrió su trasfondo patriótico en una serie de artículos sobre la educación filosófica en la Nueva España, en la que Alzate criticaba el escolasticismo tomista y el viejo método gramatical para la enseñanza del latín y recomendaba la adopción de la filosofía moderna, en especial de la rama natural iluminista de Bufón, Raynal, Lineo, Pauw y Franklin⁷.

⁴ Ver Habermas, Jürgen, *El cambio estructural de lo público*, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1987; Guerra, Francois-Xavier y Lempérière, Annick, *Los espacios públicos en Hispanoamérica. Ambigüedades y problemas, Siglos XVIII-XIX*, México, D.F. FCE, 1998; Chávez Lomeli, Elba, *Lo público y lo privado en los impresos decimonónicos. Libertad de Imprenta (1810-1882)*, México, D.F., Porrúa/UAM, 2009.

⁵ Sobre cómo se resolvió la pregunta ¿si fue posible una reducción de la imagen y pensar en una nueva dimensión a escala para advertir una “patria chica” como lo fueron las provincias que se transformaron en entidades federativas soberanas?, ver el artículo, Núñez Arancibia, Rodrigo, “El problema de la soberanía en el centro-occidente de México entre 1808-1830”, *Cuadernos de Historia* N° 31, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, pp. 1-10.

⁶ Alzate y Ramírez, José Antonio, *Índice de las Gacetas de la Literatura de México*, México, Instituto Mora, 1996, pp. 53-64.

⁷ *Ibid.*, pp. 65 y 82.

La reorientación de esta pedagogía ilustrada hacia un horizonte autonomista, en el que la figura del “súbdito del rey” se ve desplazada por la del “vecino del reino”, es muy frecuente entre las elites criollas de principios del siglo XIX. Con la libertad de imprenta se percibe la apertura del discurso político, allí donde solo se verificaba la exposición de temas científicos y filosóficos propiciando una movilización del estatuto como advertimos de lo “útil”⁸. A partir de los movimientos autonomistas y separatistas de 1808 y 1810, esta reorientación se bifurca entre los órdenes constitucionales de la insurgencia y el gaditanismo. La Constitución autonomista de Ignacio López Rayón (1813), que tan creativamente distribuía la soberanía novohispana en su “dimanación” (el pueblo), su “residencia” (Fernando VI) y su “ejercicio” (el Supremo Congreso Nacional Americano), consagraba una “libertad absoluta de imprenta, puntos relativamente científicos y políticos, con tal que estos últimos observen las miras de ilustrar y no de zaherir las legislaciones establecidas”⁹.

Sin duda, la revolución política hispánica que estalló en 1808, con la invasión napoleónica a la Península, actuó como un acelerador de aquel proceso ilustrado de constitución de un espacio público moderno por medio de la imprenta. El Real Decreto sobre la Libertad Política de Imprenta, del 10 de noviembre de 1810, fue el punto culminante de una fuerte presión a favor de la apertura de la esfera pública, que se propagó en los ayuntamientos del mundo hispánico desde el verano de 1808. En junio de 1809, la Junta Central se hizo eco de esa presión por medio de un llamado a que los impresos no solo propagaran las ideas útiles de la Ilustración sino que contribuyeran a formar la opinión política patriótica, que se requería para enfrentar la invasión francesa y para reconstituir la monarquía.

El Real Decreto codificó esa funcionalidad pública de la libertad de imprenta eliminando los mecanismos de censura para las ideas políticas, aunque preservándolos para las cuestiones de la fe católica. Dado que la legislación preconstitucional y constitucional de las Cortes de Cádiz preservó el fuero eclesiástico, el ejercicio de opinión en materia religiosa quedó comprendido en la justicia eclesiástica. No fue este, desde luego, el único límite a la libertad de expresión que estableció el Real Decreto. En varios de sus artículos se tipificaba los diversos tipos de abuso de la libertad de imprenta: “la infamia”,

⁸ Guerra, François-Xavier, y Lempérière, et al., *Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX*, México, FCE, pp. 61-64.

⁹ Tena Ramírez, Felipe, *Leyes fundamentales de México, 1808-1964*, México, D.F., Editorial Porrúa, 1964, p. 26.

“la calumnia”, “la subversión” de las leyes de la monarquía o la edición de papeles “licenciosos”, contrarios a la decencia pública y las buenas costumbres¹⁰.

El establecimiento de una Junta Suprema de Censura fue el modo de contraponer los límites morales y religiosos a la liberación de la imprenta impulsada por las leyes gaditanas. Esa institución era, sin embargo, la garantía de que el Decreto de Libertad de Imprenta fuera aplicado en el territorio peninsular y ultramarino. A pesar de que importantes letrados criollos de México y Guadalajara, como José María Fagoaga, Agustín Pomposo Fernández, Guillermo Aguirre, Mariano Beristáin y Souza, Juan José Moreno, Toribio González y Pedro Támez, fueron nombrados como integrantes de dichas Juntas, en ambas ciudades, la instalación de las mismas y la publicación del Decreto se dilató casi año y medio, hasta la promulgación de la propia Constitución de Cádiz en 1812.

A pesar de que el virrey Francisco Javier Venegas mostró inconformidad con esa situación, las mayores resistencias al Decreto provinieron de la jerarquía del clero secular de ciudades como Puebla, Valladolid, Guadalajara, Mérida, Monterrey. No obstante, la mayoría de las intendencias, encabezadas por funcionarios peninsulares, respaldaron la legislación gaditana. Como ha observado Elba Chávez Lomelí, las trabas que las élites realistas novohispanas impusieron a la libertad de imprenta no impidieron que la misma se abriera camino a partir de septiembre de 1810, tanto en el bando insurgente como en el contrainsurgente, enfrentados en la guerra de independencia. Los primeros cuatro años de la guerra (1810-1814) coincidieron con aquella dilatación de la esfera pública, propiciada por el conflicto mismo y por la legislación gaditana.

El lugar de la traición

Desde 1810 se observa, en la Nueva España, un incremento notable de la escritura y edición de publicaciones e impresos (bandos, proclamas, panfletos, odas, diálogos, sátiras...) en los dos frentes propagandísticos de la guerra. Tanto la prensa insurgente (*El Despertador Americano, Ilustrador Nacional, Ilustrador Americano, Semanario Patriótico Americano, El Despertador Michoacano, El Correo Americano del Sur, El Mexicano independiente*), editada en ciudades eventualmente tomadas por Hidalgo o Morelos, como Guadalajara, Zitácuaro, Valladolid o Oaxaca, como en la contrainsurgente, publicada fundamentalmente,

¹⁰ Dublán, Manuel y Lozano, José María, *Legislación mexicana. Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la República*, México D.F., Editorial Oficial, 1912, T. I., pp. 337-338.

en la ciudad de México (*El Fénix, El Ateneo, El Español, el Anti Hidalgo...*) se sintió la dilatación de la esfera pública propiciada por la legislación gaditana.

En los primeros momentos, la confrontación ideológica entre ambos frentes produjo una curiosa sintonía ideológica. En los números iniciales de *El Despertador Americano*, por ejemplo, entre fines de 1810 y principios de 1811, el ilustrado tapatío Francisco Severo Maldonado arremetía contra los peninsulares residentes en la Nueva España que respaldaban la invasión francesa a España y el trono impuesto de José Bonaparte. No se refería aquel periódico, editado en Guadalajara a que las tropas de Félix María Calleja derrotaron a las de Hidalgo en la batalla de Puente de Calderón, a todos los españoles avecindados en América “ha habido y hay entre nosotros Españoles de una probidad superior a todo justo reproche”, sino a aquellos “reos de alta traición”, que habían deshonorado el “juramento de vencer o morir por la Religión y por Fernando”¹¹.

Como ha observado Miquel I. Verges, Maldonado no solo establecía diferencias entre los españoles americanos “no afrancesados” y los “gachupines traidores”, sino entre Francia, nación “atea” y “despótica”, gobernada por “los monstruos que abortó Córcega”, y la Gran Bretaña, reino “generoso, incomparablemente justo y profundamente político”, amigo de los “verdaderos españoles”¹². Aunque desde los primeros números de aquel periódico se reiteraron tópicos raciales y morales “antigachupines”, que incentivaron la violencia revolucionaria de la guerra, no habría que perder de vista que para los periodistas insurgentes los “gachupines” no eran todos los europeos americanos sino aquellos que ponían sus bienes y fortunas o sus armas e ideas a favor de la contrainsurgencia.

La complejidad de la composición social, racial e ideológica de los bandos enfrentados se hizo visible, por ejemplo, en el cuarto número de aquel periódico, donde apareció un mensaje a “los americanos que militan bajo las banderas de los europeos Flon y Callejas”. Allí, Severo Maldonado repetía el argumento de que los “herejes” y “ateos” eran quienes se ponían del lado de la Francia napoleónica, continuadora de la Revolución de 1789, y de sus colaboradores peninsulares, posición que no dejaba de ser paradójica en un criollo ilustrado, formado en lecturas de Montesquieu, Voltaire y Diderot. A esos americanos, que combatían bajo las banderas del ejército virreinal, Severo Maldonado, quien

¹¹ Verges, J.M. Miquel, *La independencia mexicana y la prensa insurgente*, México D.F., INHERM, 1985, p. 47.

¹² *Ibid.*, pp. 49-50.

pocos meses después reaparecería como editor de la prensa contrainsurgente en *El Telégrafo de Guadalajara*, preguntaba:

¿Peleáis acaso, hermanos nuestros muy amados por el legítimo Rey de la monarquía española, por el desgraciado y cautivo Fernando? ¿Pero advertís que los Gachupines ya ni se acuerdan de este Monarca infeliz? ¿No veis que la España ha reconocido por su Rey a un intruso, y que todos los juramentos, y fanfarronadas de los Gachupines han venido a parar en que se postren ante el ídolo detestado, ante aquel *Jusepe*, aquel Pepe Botellas, aquel Rey de copas, que es ahora para ellos el Rey Sabio, el Rey Filósofo, el regenerador de las Españas? ¿Cómo puede decirse que peleáis por Fernando, cuando habéis hecho causa común con los Europeos que se han vuelto sus más crueles y decididos adversarios?¹³

Las preguntas de *El Despertador Americano* no eran retóricas sino que estaban dirigidas a refutar la idea de que el bando peninsular representaba la causa fernandista. El antigachupinismo que se lee en los bandos y decretos de líderes de la insurgencia, como Hidalgo y Morelos, estaba dirigido fundamentalmente, a la soldadesca de un ejército, mayoritariamente criollo, que respondía a esos llamados confrontacionales. Pero en la prensa insurgente encontramos otro tipo de mensaje, dirigido a las élites letradas criollas, en el que la lealtad a la religión católica y al trono de Fernando VII ocupaba un lugar central. En el *Ilustrador Nacional*, el periódico que redactó e imprimió José María Cos en Real de Sultepec, luego del legendario sitio de Cuautla, que resistieron las tropas de Morelos, se reiteraba aquella lealtad. La “América leal”, según Cos, no era la que permanecía fiel a los Bonapartes sino la que se enfrentaba a Francia y a los españoles afrancesados:

A fuego tan activo fueron dando pábulo y energía, así el despotismo del gobierno intruso, como los frecuentes insultos con que abusaban de la bondad de la nación aquellos hombres perversos, y ¿cuál debía ser el resultado? El que con dolor nuestro estamos mirando en la presente lid, que continuaremos hasta derramar la última gota de sangre por el bien de la patria, por conservar estos dominios a Fernando VII, y porque no sea vulnerada la Religión santa que profesamos¹⁴.

El intercambio de motes en la prensa insurgente y la contrainsurgente nos persuade de aquella disputa por el lugar de la traición. La prensa virreinal estigmatizaba a Hidalgo y Morelos como monstruos sacrílegos, cuando no diabólicos, pero la

¹³ Ibid., p. 57.

¹⁴ Ibid., p. 70.

prensa insurgente, como se observa en el *Ilustrador Americano*, descalificaba a Venegas y a Calleja como “visires”, “nuevos Robespierres”, “ateos”, “materialistas” y “sajones”. Unos y otros, en nombre de la religión católica y de la fidelidad fernandina, se acusaban mutuamente de infidencia. Buena parte de la pasión retórica de la prensa insurgente estuvo puesta en transferir el cargo de traición y herejía a los peninsulares, que en sus propios periódicos y panfletos acusaban de irreligiosidad y jacobinismo a los criollos autonomistas.

Es interesante, en este sentido, repasar la panfletografía mal llamada “realista” —ya que insurgentes y contrainsurgentes fueron, mayoritariamente fernandistas, hasta 1814— para advertir no solo la estigmatización de Hidalgo y Morelos sino el intento de presentar la causa virreinal como leal, no a Francia o a los Bonapartes, sino al Imperio borbónico. Desde tan temprano como 1809, folletos como los de Pedro Ceballos, José Mariano Beristáin de Souza y Juan López Cancelada yuxtaponían la posición autonomista de los criollos con el colaboracionismo de Manuel Godoy y los afrancesados peninsulares, creando así, un falso frente común¹⁵. Esa misma operación intelectual reapareció en los múltiples folletos “anti-Hidalgo” o “contra Hidalgo” que editó la imprenta de Mariano Zúñiga Ontiveros, entre 1810 y 1811, escritos o impulsados, la mayoría, por el mismo canónigo Beristáin de Souza¹⁶.

Beristáin fue también el mismo promotor de las réplicas directas que, desde la ciudad de México, la prensa virreinal lanzó a la prensa insurgente. El periódico *El Verdadero Ilustrador Americano* de 1812 fue la refutación al periódico del mismo nombre, editado por el doctor Cos. El mismo tono de interpelación se lee en el seminario contrainsurgente *El amigo de la Patria*, creado por el propio Beristáin, Ramón Roca y Florencio Pérez Camoto, que intentó presentar a los criollos insurgentes como enemigos de la patria novohispana. Esa estrategia discursiva, que buscaba no solo la excomunión de los sacerdotes insurgentes sino su estigmatización como apátridas y aliados de los franceses aparece en el enjundioso panfleto de Agustín Pomposo Fernández de Salvador, *Desengaños*

¹⁵ Pedro Ceballos, *Exposición de hechos y maquinaciones que han preparado la usurpación de la Corona de España y los medios que el emperador de los franceses ha puesto en obra para realizarla*, México, Gaceta de la Nueva España, 1809, pp. 1-44; José Mariano Beristáin de Souza, *Discursos político-moral que en los solemnes cultos rinde al Santísimo Sacramento en los días del Carnaval la real Congregación de Eclesiásticos Oblatos de México*, México, Oficina de Doña María Fernández de Jáuregui, 1809, pp. 4-14.

¹⁶ Verges, J.M. Miquel, 1985, op. cit., pp. 28-29.

*que a los insurgentes de Nueva España seducidos por los francmasones agentes de Napoleón, dirige la verdad de la religión católica y la experiencia, (1812)*¹⁷.

Pomposo Fernández, tío de Leona Vicario, era el titular de un prestigioso bufete de la ciudad de México, donde trabajó por un tiempo Andrés Quintana Roo. El letrado virreinal ponía el énfasis en la conexión de los insurgentes con la tradición ilustrada y masónica francesa, con el fin de descaracterizarlos como católicos y fernandistas. En el mismo sentido se pronunció el fraile sonorense, afincado en Querétaro, Diego Miguel Bringas y Encinas, en su réplica al “manifiesto de la Nación Americana” que el Dr. Cos publicó en los primeros números del *Ilustrador Americano*, entre mayo y junio de 1812. Bringas, que era calificador de la Inquisición, llamaba a Cos “insurgente relapso”, “excusa de San Cosme”, “reo de Estado fugitivo de la ciudad de Querétaro” e intentaba persuadir, sobre todo a la población criolla de que la causa insurgente no era, como afirmaba Cos en su manifiesto, leal a Fernando VII y devota de la religión católica¹⁸. Aunque tanto Bringas como Cos enviaban mensajes lo mismo a los peninsulares que a criollos, es curioso que el primero, desde el bando virreinal, se dirigiera sobre todo a los criollos, mientras que el segundo, desde el insurgente, se dirigiera a los peninsulares.

“Estoy seguro que todos los hombres buenos de ambos partidos aprobarán en todo el tiempo los sentimientos estampados en estos pliegos: ellos son los de toda la América”, escribía el doctor Cos en aquel manifiesto¹⁹. Sentimientos, agregaba en el mismo, “de religión, humanidad y fidelidad a nuestro augusto monarca, el Sr. Fernando VII”²⁰. El debate entre Bringas y Cos, era por tanto, uno entre criollos en el que lo que se dirimía era el lugar de la lealtad o la traición a la monarquía católica. Esa disputa, que se desarrollaba por medio de una guerra a muerte en el campo de batalla, en la esfera de los discursos ofrecía un espectáculo de rara convergencia retórica. La paradoja, como advierte Tomás

¹⁷ Agustín Pomposo Fernández de Salvador, *Desengaños que a los insurgentes de Nueva España seducidos por los francmasones agentes de Napoleón, dirige la verdad de la religión católica y la experiencia*, México D. F., Mariano Zúñiga Ontiveros, 1812, pp. 120-140.

¹⁸ Fr. Diego Miguel Bringas y Encinas, *Inauguración del papel sedicioso y calumniate, que bajo el título de la nación americana a los europeos que habitan en este continente, abortó el Real de Sultepec el 16 de marzo de 1812, el insurgente relapso Doctor José María Cos*, México D. F., Imprenta de Doña María Jáuregui, 1812, pp. 75-110.

¹⁹ Verges, J. M. Miquel, 1985, op. cit., p. 87.

²⁰ Ibid., p. 88.

Pérez Vejo, reside en que se trataba, en un importante margen demográfico del conflicto —no en todo— de una guerra civil²¹.

El *Plan de Guerra* y el *Plan de Paz*, editados por el doctor Cos, precisamente en el *Ilustrador Americano*, en el verano de 1812, nos introducen en la querella discursiva de una guerra civil. En el primero se admitía que la guerra era “no entre naciones extranjeras” sino “entre hermanos y conciudadanos” y que, por tanto, no debía ser “más cruel”. El Dr. Cos demandaba que si la guerra de independencia era “entre hermanos y conciudadanos”, ya “que los dos partidos beligerantes reconocían a Fernando VII” como monarca legítimo, entonces con más razón debían ser respetados los derechos de gentes y de guerra, que aseguraban que los prisioneros fueran tratados como reos de la majestad y que no fueran torturados o ejecutados²².

En el *Plan de la Paz*, Cos llevaba el argumento de la guerra civil hasta sus últimas consecuencias, aduciendo que “si la soberanía reside en la masa de la nación y España y América son partes integrantes de la monarquía, sujetas al Rey, pero iguales entre sí y sin independencia o subordinación de una respecto de la otra”, entonces la península no podía apropiarse del derecho de representación de los americanos, como se intentaba en Cádiz, y que los propios americanos tenían tanto o más derechos a convocar cortes y llamar como representantes a los peninsulares fieles a Fernando VII, que no se hubieran aliado a los franceses²³. Cos imaginaba el fin de la guerra a partir de la formación de un “congreso nacional e independiente de España, representativo de Fernando VII”, que “afianzaría los derechos” del monarca católico en la Nueva España, pero que estaría compuesto por representantes de todos los pobladores del reino fueran peninsulares o criollos²⁴.

Esta visión de la guerra, como forma artificial o doctrinalmente injustificada, se difundió en buena parte de la prensa insurgente, bajo la libertad de imprenta gaditana. Incluso en los momentos más patrióticos o republicanos de José Joaquín Lizardi o *El hombre libre* de Juan Bautista Morales, no es imposible encontrar bajo la encendida retórica antigachupina, el argumento de que la guerra era evitable por medio de un reconocimiento de los derechos históricos del reino de la Nueva España, establecidos en las leyes de la monarquía católica y refrendados por la Constitución de Cádiz. Sin embargo, como han estudiado

²¹ Pérez Vejo, Tomás, *Elegía criolla. Una reinterpretación de las guerras de independencia hispanoamericana*, México D. F., Tusquets, 2010, pp. 61-112.

²² Verges, J. M. Miquel, 1985, op. cit., p. 101.

²³ *Ibid.*, p. 99.

²⁴ *Ibid.*

Christon Archer, David Brading, John Tutino, Brian Hamnett y Eric Van Young, entre otros, el conflicto ideológico de la independencia se diversificó durante la guerra, incorporando tensiones sociales, étnicas y regionales, que no tenían solución dentro del fernandismo y el gaditanismo²⁵.

Límites de la opinión republicana

Luego de la breve contracción de la esfera pública novohispana, iniciada en 1814, que coincidió con la restauración absolutista en la Península, la derogación de la Constitución de Cádiz y el éxito de las campañas contrainsurgentes de Félix María Calleja y Juan José Ruiz de Apodaca, en 1821 vuelve a experimentarse un incremento de la opinión impresa en México. La entrada del Ejército Triaguarante a la ciudad de México, en septiembre de ese mismo año, y la instalación de la Primera Regencia del Imperio, unidas al restablecimiento de la Constitución de Cádiz en la Península y en la nueva España hizo de la libertad de imprenta uno de los mecanismos políticos fundamentales del momento. La Primera Regencia, presidida por Agustín de Iturbide, estaba integrada por el último virrey Juan O'Donojú, quien falleció en octubre de ese año, y por dos importantes miembros del clero novohispano, Manuel de la Bárcena, gobernador del Obispado de Valladolid de Michoacán, y Antonio Joaquín Pérez, obispo de Puebla.

La presencia de estos miembros del clero, que fue limitada en la Segunda Regencia, marcó, en buena medida, el debate sobre los límites de la libertad de imprenta en los primeros meses del Imperio, luego de la anulación del Tribunal del Santo Oficio, por las Cortes de Madrid, que restablecieron el *Decreto* gaditano contra la inquisición, del 22 de febrero de 1813, invalidado por Fernando VII en 1814. El Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos de las dos regencias y del Imperio de Iturbide, José Domínguez Manzo, era un resuelto partidario de la libertad de prensa, siempre y cuando se respetaran los límites de lo cuestionable a partir de la consagración simbólica de algunos valores e instituciones. En la Constitución de Cádiz esos límites estaban relacionados con la religión católica y con la persona del monarca, que según el artículo

²⁵ Brading, David, *Orígenes del nacionalismo mexicano*, México, D.F., Era, 1994; Hamnett, Brian, *Raíces de la insurgencia en México: historia regional, 1750-1824*, FCE, 1990; Tutino, John, *De la insurrección a la revolución en México: las bases sociales de la violencia agraria, 1750- 1940*, México, D .F., Era, 1990; Van Young, Eric, *La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810-1821*, México, D. F. Para un repaso de la historiografía social y militar de la guerra de independencia, ver Ávila, Alfredo y Guedea, Virginia (coord.), *La independencia de México. Temas e interpretaciones recientes*, México, D.F., UNAM, 2007, pp. 65-84 y 145-162.

168 era “sagrada, inviolable y no estaba sujeta a responsabilidad”²⁶. Los líderes del Imperio de Iturbide, a partir del verano de 1822, intentaron acomodar esa concepción de la libertad de imprenta a un nuevo texto constitucional, como puede leerse en el *Reglamento Provisional del Imperio Mexicano*, redactado a fines de 1822 por una comisión del primer Congreso Constituyente, de la que formaron parte los letrados Toribio González, José Antonio Valdés y Ramón Martínez de los Ríos.

El *Reglamento* dedicó tres artículos, el 17º, el 18º y el 19º, al tema de la libertad de prensa, que vale la pena reproducir, con el fin de comprender mejor las tensiones entre prensa y poder bajo el imperio de Iturbide. El primero de aquellos artículos ratificaba la pertenencia del nuevo orden constitucional al paradigma liberal, que respetaba la libertad de pensar y expresarse como uno de los derechos del hombre, pero proponía regulaciones a dicha libertad que iban más allá de la religión católica y la persona del emperador y que tenían que ver con las instituciones de la monarquía moderada, con la independencia y con la unión entre peninsulares y criollos. Los legisladores iturbidistas pensaban que el consenso logrado por el Plan de Iguala, en 1821, debía ser protegido de los cuestionamientos de la prensa si se quería alcanzar la relativa estabilidad del imperio:

Nada más conforme a los derechos del hombre, que la libertad de pensar y manifestar sus ideas; por tanto así como se debe hacer un radical sacrificio de esta facultad, no atacando directa ni indirectamente, ni haciendo sin previa censura, uso de la pluma en materias de religión y disciplina eclesiástica, monarquía moderada, persona del Emperador, independencia y unión, como principios fundamentales, admitidos y jurados por toda la nación desde el pronunciamiento del Plan de Iguala, así también en todo lo demás, el gobierno debe proteger y protegerá sin excepción la libertad de pensar, escribir y expresar por la imprenta cualquiera conceptos o dictámenes y empeña todo su poder y celo en alejar cuantos impedimentos puedan ofender este derecho que mira como sagrado²⁷.

El segundo artículo del *Reglamento* dedicado a la libertad de prensa estipulaba, en consonancia con la legislación gaditana, la censura previa de escritos sobre temas religiosos o eclesiásticos. Un juez ordinario del clero debía autorizar el escrito en veinticuatro horas si era menor de tres pliegos y en seis días si sobrepasaba esa extensión. Si algún libro, artículo de periódico o panfleto de materia religiosa se imprimía sin autorización eclesiástica, “el juez podía retirarlos

²⁶ Tena Ramírez, Felipe, op. cit., p. 80.

²⁷ *Ibid.*, pp. 127-128.

de circulación y castigar al autor e impresor con arreglo a las leyes canónicas”²⁸. El artículo agregaba que “en los demás puntos” (monarquía moderada, persona del emperador, independencia, unión y Plan de Iguala), la “censura la hará cualquier juez de letras a quien se pida la licencia, en los mismos tiempos; pero bajo responsabilidad, tanto al gobierno, si fuere aprobatoria, como a la parte solicitante si fuere condenatoria”²⁹.

Las fronteras de la opinión pública que intentaba trazar el imperio de Iturbide marcaban el territorio de lo debatible en dos sentidos: frente a la oposición borbonista, que cuestionaba la legitimidad de Iturbide y, en menor medida, la independencia y la monarquía moderada, y frente a la oposición republicana, que también impugnaba la persona del emperador, el régimen monárquico, el centralismo y la hegemonía social y económica de los peninsulares, que, según algunos de esos opositores, se ocultaba bajo el principio de la “unión”³⁰. Esa voluntad de crear un marco de libertad de opinión, que respetara los límites establecidos en el *Reglamento*, quedó claramente plasmada en el artículo 19º, que rechazaba la publicación de panfletos anónimos o firmados con pseudónimos: “Como quiera que el ocultar el nombre en un escrito, es ya una presunción contra él, y las leyes han detestado siempre esta conducta, no se opone a la libertad de imprenta la obligación que tendrán todos los escritores con expresión de fecha”³¹.

Aunque el artículo no contemplaba en la letra la penalización de los anónimos pseudónimos, su espíritu reflejaba el malestar del poder iturbidista con la emergencia de una panfletografía opositora, mayoritariamente republicana, pero también borbonista. En las primeras páginas el *Catálogo de la Colección Lafragua* (1975), que preparó Lucina Moreno Valle, es fácilmente documentable el auge de la escritura pública opositora que el imperio, infructuosamente, intentó frenar³². A juzgar solo por el material reunido en este catálogo, el año que se había impreso mayor cantidad de panfletos, en la primera etapa del México independiente, fue 1822, seguido del siguiente, 1823³³. No es raro que esa dilatación de la esfera pública impresa se haya producido, precisamente en el momento de la transición del Imperio a la Primera República Federal y

²⁸ Ibid., p. 128.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ávila, Alfredo, *Para la libertad. Los republicanos en tiempos del imperio. 1821-1823*, México D.F., UNAM, 2004, pp. 79-114.

³¹ Tena Ramírez, Felipe, 1964, op. cit., p. 128.

³² Moreno Valle, Lucina, *Catálogo de la Colección Lafragua. 1821-1853*, México D.F., UNAM, 1975, pp. 1-110.

³³ Ibid., pp. 111-115.

que la misma haya acompañado a la recomposición de la nueva clase política mexicana y sus vínculos con la ciudadanía.

El nuevo régimen republicano surgió en medio de aquella dilatación de la esfera pública e intentó darle cauce por medio de las instituciones federales. A diferencia del Imperio de Iturbide, no había entonces un consenso o una legitimidad que cuidar de los ataques de la opinión pública, aunque sí una religión que proteger. En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 no era necesario consagrar la libertad de imprenta como un derecho natural, ya que la misma estaba arraigada como principio y práctica de la vida pública mexicana desde 1821 y aparecía en el artículo 31° del Acta de la Constitutiva de la Federación: “todo habitante de la federación tiene la libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades de las leyes”³⁴. Sin embargo, sí era indispensable asegurar, en el artículo 3°, que la religión católica sería constitucionalmente protegida “por leyes sabias y justas”, en tanto religión única de la nación mexicana³⁵. El artículo 3° tuvo implicaciones para la legislación parlamentaria de la libertad de imprenta en el orden constitucional federal y en el de los Estados de la nueva federación.

A pesar de todo ello la libertad de imprenta fue constitucionalmente adoptada por todos los nuevos Estados. En algunos, como el Estado de México, donde ciudades como Tlalpan, Cuernavaca, Tezcoco y Toluca tenían una importante actividad editorial, la Constitución de 1827, redactada por José María Luis Mora, formuló la libertad de prensa en términos más amplios que la legislación federal, al establecer, en el artículo 27°, que “ningún ciudadano del estado podría ser reconvenido ni castigado en ningún tiempo por meras opiniones”³⁶. El amplio margen de libertad de expresión producido por el tránsito a la república federal se tradujo en la creación de periódicos en las principales capitales de los Estados y en no pocas ciudades importantes de los mismos, como el *Águila Mexicana*, *El Sol*, *El correo de la Federación* o *el Observador de la República Mexicana*, en la ciudad de México, *El oriente Jalapa* de Jalapa, *El Veracruzano Libre*, en Veracruz, o *El Iris de Jalisco*, *El Nivel*, *La Palanca* y *Reformador Federal*, en Guadalajara.

El notable incremento de la edición de periódicos a nivel federal y estatal, entre 1824 y 1830, fue capitalizado, naturalmente, por las corrientes políticas

³⁴ Tena Ramírez, Felipe, 1964, op. cit., p. 159.

³⁵ Ibid., p. 168.

³⁶ Robles Martínez, Reynaldo, *Constituciones del Estado de México y sus reformas, 1824-2008*, Toluca, Instituto de Estudios Legislativos, 2008, p. 24.

de la Primera República, asociadas a las dos logias rivales de la masonería: la yorkina y la escocesa. Los principales temas de debate entre dichas logias en la década de los veinte –la expulsión de los españoles, la estrategia defensiva frente a la amenaza de reconquista de Fernando VII y la Santa Alianza, la pugna de los ministros del gabinete de Guadalupe Victoria, la conspiración del padre Arenas, la elección presidencial de Manuel Gómez Pedraza en 1828, la revuelta de la Acordada en 1829, la breve presidencia de Vicente Guerrero...– dominaron las páginas de decenas de periódicos y centenares de panfletos publicados en aquellos años. La formidable dilatación de la esfera pública impresa, que sucedió a la independencia, generó como han estudiado Pablo Picatto, Elba Teresa Chávez Lomeli y María Eugenia Vázquez Semadeni, reacciones desde las élites que intentaron una contracción de la misma³⁷.

Entre 1825 y 1829, la Secretaría de Relaciones Interiores y Exteriores, a cargo de Sebastián Camacho, Juan José Espinosa de los Monteros y Juan de Dios Cañedo, tomó medidas contra “abusos” de la libertad de imprenta, localizados, sobre todo, en “libelos infamantes” de panfletistas como José Joaquín Fernández de Lizardi, Pablo de Villavicencio (“El Payo del Rosario”), Rafael Dávila, Luis Espino, Francisco Santoyo o Telésforo Urbina. Los encarcelamientos de algunos de ellos, así como las deportaciones que el gobierno de Guadalupe Victoria decretó contra los carbonarios italianos Orazio Attelis (Marqués de Santángelo), Claudio Linati y Florencio Galli son ilustrativos de los mecanismos de control de prensa que intentó aplicar la primera administración de la República Federal. Dichos mecanismos respondieron a la legislación reglamentaria que se derivó de la Sección Séptima, título quinto, de la Constitución de 1824, que regulaba la administración de la justicia de 1824, que regulaba la administración de justicia en casos de “infamia” o “injuria”³⁸. Los gobernantes de la República Federal echaron mano, entonces, de la estructura de los jurados de imprenta, instaurados por el Imperio de Iturbide a partir de la legislación gaditana, y en 1828, siendo secretario Juan de Dios Cañedo, impulsaron una reforma del *Reglamento de Libertad de imprenta* de 1821.

³⁷ Picatto, Pablo, “Jurados de Imprenta en México: el honor en la construcción de la esfera pública”, 1821-1882, en Paula Alonso (ed.), *Construcciones impresas, Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América latina, 1820-1920*, México, D.F., FCE, 2003, pp. 139-166; María Eugenia Vázquez Semadeni, *La formación de una cultura política republicana. El debate público de la masonería, México, 1821-1830*, México D.F., INAM, 2010, pp. 109-112 y 211-226.

³⁸ Tena Ramírez, Felipe, 1964, op. cit., p. 190.

Por medio de un decreto del 14 de octubre de 1828, el gobierno de Victoria reinstaló los jurados con algunas modificaciones importantes, propias del nuevo orden republicano. A partir de entonces, las autoridades municipales recibirían quejas contra los “abusos” de imprenta y presentarían cargos contra el autor o el impresor del panfleto infamante ante un jurado compuesto por nueve ciudadanos, nombrados por sorteo, cuyos requisitos eran saber leer y escribir, poseer un capital de 4000 pesos o una industria u oficio que produjera 1000 pesos anuales y no ocupar el cargo de jefe político o pertenecer al ejército o al clero. De acuerdo con el decreto, los abusos de la imprenta relacionados con la sedición o la incitación a la desobediencia en primer grado justificaban la orden de aprehensión por parte de los jueces, con lo cual el sector más vulnerable de la esfera pública era el de los panfletistas populares³⁹.

La funcionalidad de esta modificación del *Reglamento* de 1821 se puso a prueba en el último año del gobierno de Guadalupe Victoria y durante el breve período presidencial de Vicente Guerrero, en 1829. En septiembre de ese año, Guerrero aplicó un *Decreto del Gobierno en uso de sus facultades extraordinarias sobre el abuso de la libertad de imprenta*, que le permitió arrestar a publicistas como Francisco Ibar, que cuestionaban sus políticas, bajo el cargo de que atentaban contra la permanencia del sistema republicano y federal⁴⁰. Durante el gobierno de Anastasio Bustamante, que sucedió al de Guerrero, ese tipo de represión contra panfletistas se ejerció con mayor frecuencia y rigor. A partir de entonces, las propias intervenciones públicas de la masonería comenzarían a ser cuestionadas por una opinión impresa en proceso de institucionalización.

A modo de conclusión

Frente a la definición de los alcances y límites del debate de la independencia, podría afirmarse que la creciente polarización social y política que experimentó el México independiente en su primera década redefinió los márgenes de la esfera pública, en un momento de dilatación de la misma, generada por el cambio del régimen político y el ejercicio de nuevas formas de sociabilidad política. El nuevo Estado debió enfrentarse, entonces, al dilema de crear las bases institucionales y legales de la libertad de expresión, necesarias para la constitución de una ciudadanía republicana y, a la vez, trazar los límites precisos a dicha libertad que facilitarían el consenso político y la paz social. Dilema

³⁹ Chávez Lomelí, Elba Teresa, *Lo político y lo privado en los impresos decimonónicos. La libertad de imprenta (1810-1882)*, Tesis de Maestría, UAM Azcapotzalco, 2004, pp. 76-77.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 78.

propio de todo Estado liberal decimonónico, pero que, en el caso de México y de Hispanoamérica de la época se vio acentuado por la falta de reconocimiento de Fernando VII y la Santa Alianza y el legado de diez años de guerra civil.

Por otro lado, la idea del nuevo “público” que aparece en los textos de Alzate, Bringas y Cos, Bustamante y Fernández de Lizardi remite a una comunidad de lectores que no corresponde plenamente a la ciudadanía de una república moderna y que, más bien, debería asociarse con el “reino de los súbditos” de las monarquías constitucionales europeas de la primera mitad del siglo XIX⁴¹. Dicha concepción de una libertad acotada por la monarquía fernandina y la religión católica está relacionada, sobre todo en el período entre 1808-1821, con un imaginario criollo, liberal y autonomista, dentro del movimiento de la Independencia, que se resistirá con fuerza a la asimilación de los discursos y las prácticas del republicanismo americano. Como señalaba François Furet para el caso de la Revolución Francesa: era precisamente ese temido abandono de la monarquía católica, en tanto formato de una soberanía constitucional, el punto de partida para la construcción de un Estado nacional sobre bases republicanas y liberales⁴².

⁴¹ Chartier, Roger, *El orden de los libros. Lectores, autores, bibliotecas en Europa entre los siglos XVI-XVIII*, Barcelona, Gedisa, 1994, pp. 23-40.

⁴² Furet, François, *La revolución a debate*, Madrid, Ediciones Encuentro, Petrel, p. 51.